



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

SEÑORES

JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD

SANTIAGO DE CALI

E. S. D.

RADICACIÓN:

76001333300920240027800

DEMANDANTE:

ALEXANDER ARANA FLOR

DEMANDADO:

MUNICIPIO DE PALMIRA; DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA; RAMA JUDICIAL – DEAJ -; INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC -; UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC; MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

MEDIO DE CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA- EXCEPCIONES y Llamamiento en GARANTIA.

JOSE EDILBERTO LOZANO TELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.312.947 de PALMIRA (v), Abogado titulado en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 121.177 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación de la misma de conformidad con el Decreto de Delegación No. 036 del 17 de enero de 2020, “Por medio del cual se delega la representación legal judicial, extrajudicial y administrativa y se dictan otras disposiciones” y encontrándome dentro del término legal conforme el Decreto 806 de 2020 y la Ley 1437 de 2011 artículos 172, 197 y 199, manifiesto a usted que por medio del presente escrito **CONTESTACIÓN DE DEMANDA- EXCEPCIONES y Llamamiento en GARANTIA** en los siguientes términos:

1. FRENTE A LAS PRETENSIONES.

Frente a las pretensiones propuestas nos permitimos oponernos a todas y cada una de las pretensiones de la demanda (declaraciones y condenas), toda vez que la entidad que representó no se le puede imputar responsabilidad administrativa, en la medida que los hechos acaecidos por no existe nexo causal entre lo ocurrido y el MUNICIPIO DE PALMIRA -. Por lo tanto, solicito al despacho, negar las pretensiones y/o declarar probada las excepciones propuestas, en cuanto no existen fundamentos de hecho ni de derecho que sirvan de sustento a las mismas, como se demostrará dentro de este proceso. En su lugar, se solicita condena en costas al demandante, de prosperar las excepciones propuestas.

2. LO DEMANDADO.

Me opongo rotundamente a que se hagan las declaraciones y condenas en contra de Mi representado Municipio de PALMIRA y en el mismo sentido me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas por la parte actora, por carecer de fundamentos jurídico, factico y probatorio que permita señalar al Municipio de PALMIRA, como causante de los perjuicios causados a los ACTORES, como quiera que las mismas no son imputables a esta parte.

3. A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

En esta oportunidad la demanda se contrae en determinar la responsabilidad del municipio de PALMIRA (v), por los enunciados perjuicios a los demandantes como consecuencia de la falla del servicio, que se enfoca en la acreditación de la existencia de un deber para la administración en las circunstancias concretas debatidas y en la desatención de ese deber, con motivo de una conducta de acción o de omisión de las demandadas.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

1. NO ME CONSTA: Es una Afirmación que hace la parte Demandante por intermedio de Apoderado Judicial la cual tendrá que ser probada en su momento procesal de acuerdo a la Normatividad existente para los asuntos correspondientes.

NO ES CIERTO: Es el ingreso supuestamente al Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., porque según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente “Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022”.

Solicitud de información sobre los tiempos de reclusión en el CAI – Colombia del señor ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344

DEVAL EPALMIRA <deval.epalmira@policia.gov.co>
Para: Jose Edilberto Lozano Tello <jose.lozano@palmira.gov.co>

30 de enero de 2025, 9:36 a.m.

Mensaje de correo electrónico enviado por deval.epalmira@policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

Dios y Patria

Siguiendo instrucciones del señor Capitán Alexander Jojoa Muñoz Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el CAI Delicias el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022.

2. NO ES CIERTO: Es el ingreso supuestamente al Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., porque según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente “Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022”.

3. NO ES CIERTO: Es el ingreso supuestamente al Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., porque según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente “Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022”.

4. NO ES CIERTO: Es el ingreso supuestamente al Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., porque según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente “Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022”.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121



SC-CER415753





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

5. NO ES CIERTO: Es el ingreso supuestamente al Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., porque según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente "Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL **ALEXANDER ARANA FLOR** identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022".

6. NO ES CIERTO: Es el ingreso supuestamente al Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., porque según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente "Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL **ALEXANDER ARANA FLOR** identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022".

7. NO CONSTITUYE UN HECHO: Es una actuación Judicial.

4. ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

1. AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO COMO PRIMER ELEMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

De conformidad con la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, para que ésta pueda ser endilgada a una entidad de carácter estatal en virtud del artículo 90 superior, es necesario que exista una perfecta cohesión entre los siguientes tres institutos jurídicos: **Daño, Imputación y Fundamento del Deber Jurídico de Reparar.**

En relación con el daño, ha sostenido el H. Consejo de Estado Colombiano:

"... El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso."

Quiere decir lo anterior que el "daño" constituye el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, y su inexistencia o ausencia de acreditación, hace inócuo el estudio de la imputación frente a la entidad estatal demandada.

En tal virtud, a continuación me permitiré exponer las razones por las cuales, en el presente asunto, ni el daño moral, ni el derivado de la afectación a derechos constitucionales, alegado por la parte actora se halla acreditado, así:

1.1. LA AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL "DAÑO MORAL"

En relación con esta modalidad de perjuicio, ha sostenido el H. Consejo de Estado:

"Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en "el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien". Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas"



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

Así mismo, en relación con la indemnización por el daño moral derivado de lesiones, el H. Consejo de Estado ha sostenido de forma pacífica que el criterio que determina el monto de aquella indemnización no es otro que la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, estableciéndose como monto máximo de aquella modalidad de indemnización 100 SMLMV para la víctima directa del daño y para las personas con quienes aquella tiene relación afectiva conyugal y paterno filial SOLO CUANDO LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN SUPERA EL 50%

Al respecto, y partiendo de la base de que en el presente asunto el daño alegado no deviene de la muerte de la víctima directa de un daño, vale la pena preguntarse:

- ✓ ¿Sobre qué base o de qué manera es determinable el daño alegado por la parte demandante?
- ✓ ¿Sobre qué criterios se pretende endilgar responsabilidad civil al estado derivado de un Presunto daño moral?
- ✓ ¿Cuáles son las pruebas allegadas por la parte actora que permitan determinar el monto de la indemnización por aquella modalidad de daño?

La respuesta a dichos interrogantes, solo permiten sostener de manera categórica, que en el presente asunto EL DAÑO ALEGADO, ES INCIERTO, EVENTUAL E HIPOTÉTICO, y asimismo TAMBIEN ES INDETERMINADO E INDETERMINABLE. Asimismo, y además de tratarse de un daño que no comporta vocación de ser reparado, también se trata de una pretensión absolutamente desfasada de las reglas establecidas por el H. Consejo de Estado, en relación con el monto máximo de indemnización por la modalidad de daño moral, cual es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al tenor de lo atrás expuesto.

EN CONCLUSIÓN, de conformidad con las precitadas reglas jurisprudencias del H. Consejo de Estado, en el presente asunto no hay lugar a desplegar un estudio de imputación jurídica al Estado, al buscarse la reparación de un daño TANTO INCIERTO, HIPOTÉTICO Y EVENTUAL, COMO INDETERMINADO E INDETERMINABLE, y cuyo monto de reparación además de ser desfasado y desproporcionado en relación con los criterios establecidos por dicho alto tribunal, también carece de elementos que permitan establecer, asimismo es indeterminado e indeterminable.

En tal virtud, es evidente que la pretensión encaminada al resarcimiento del presunto daño moral ocasionado a la parte demandante, no comporta vocación de prosperidad alguna.

1.2. AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO DERIVADO DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES.

Al respecto, lo primero que vale la pena advertir, es que el H. Consejo de Estado estableció una tipología de daño denominada “Daño por Afectación o Vulneración Relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados” y al respecto, ha sostenido dicha H. Corporación:

“Procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatoria no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobando las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia,

reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado”

Al tenor de lo anterior, vale la pena destacar que:

- ✓ En primer lugar, el *telos* o finalidad de esta tipología de perjuicio no es otro que garantizar la reparación integral tanto de la víctima directa del daño como de sus familiares, por lo que las medidas que se privilegian, no son de carácter indemnizatorio sino compensatorio.
- ✓ En segundo lugar, solo de manera excepcional, la restauración por dicha modalidad de perjuicio es medible en dinero, y aquella excepción se halla supeditada a que las medidas de satisfacción por las que propende esta tipología de daño, no son suficientes para garantizar la reparación integral de sus destinatarios.
- ✓ Cuando aplica la precitada excepción, el monto máximo de indemnización establecido por el H. Consejo de Estado es de 100 SMLMV, Y SOLO PARA LA VICTIMA DIRECTA DEL DAÑO.

Hechas las anteriores precisiones, y descendiendo al presente asunto, sea lo primero advertir, que del libelo demandatorio no se desprenden la certeza del daño alegado bajo esta modalidad, pues la parte demandante pareciera tener la convicción de que, por el hecho de estar recluso en un establecimiento penitenciario y carcelario, per se, se configura esta modalidad de daño y pretende obviar la necesaria acreditación de aquel, conforme lo exigen las precitadas posiciones del H. Consejo de Estado en virtud de las cuales, el daño incierto, eventual e hipotético no da lugar a indemnización.

En segundo lugar, la parte demandante no establece de forma alguna, por qué la indemnización pretendida por la presunta causación de esta modalidad de perjuicio, debe ser medible en dinero y no a través de las medidas de restauración señaladas por el H. Consejo de Estado, ES DECIR:

¿Por qué el caso del grupo de cien (100) internos, escapa de la regla general en virtud de la cual se privilegian las medidas compensatorias más no indemnizatorias? o, ¿en qué medida aquellas medidas compensatorias no son suficientes para la reparación integral del eventual daño alegado?

Finalmente, también vale la pena advertir que en el presente asunto, la pretensión de reconocimiento y pago de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se halla desfasada y escapa, desde cualquier perspectiva de las reglas establecidas por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la cual, solo en aquellos casos excepcionales en que esta modalidad de perjuicio es tasable en dinero, el monto máximo de la indemnización reconocida por aquel, es de 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

En conclusión, la pretensión encaminada al resarcimiento por esta modalidad de perjuicio, tampoco se encuentra llamada a prosperar, como quiera que, en primer lugar, el daño no se halla plenamente acreditado, y en segundo lugar, de estarlo, el demandante no establece las razones por las cuales su circunstancia específica y concreta, conlleva a que se configure la excepción a la regla general consistente en que la reparación por esta tipología de daño, es de carácter compensatorio mas no indemnizatorio, y solo de manera excepcional es medible en dinero, cuando las medidas restaurativas no son suficientes para la reparación integral del perjuicio.

En tal virtud, en el presente asunto, la pretensión encaminada a su resarcimiento, tampoco comporta vocación de prosperidad dentro de la presente Litis.

2. RESPONSABILIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS.

Las normas especiales de la Ley 65 de 1993, delimitan el marco de las responsabilidades de Departamentos y Municipios en materia de infraestructura carcelaria, pero de conformidad con el estatuto legal, y las atribuciones de los distintos organismo que asisten en el asunto, se establece que dichos entes territoriales no responden de forma directa por la infraestructura y condiciones de las cárceles del país, pero si les asiste la responsabilidad para la administración y sostenimiento de los establecimientos de reclusión.

Del mismo modo, los municipios podrán unirse a otros para crear, administrar y sostener establecimientos de reclusión, pero dichas entidades territoriales no definen la capacidad máxima de los centros de reclusión ni las políticas carcelarias en general para resolver el hacinamiento de conformidad con los siguientes artículos:

“Artículo 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a los Departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.

La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión de sistema penitenciario y carcelario.

ARTÍCULO 18. INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Los municipios podrán convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión”.

Así las cosas, el Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, cuyo salvamento parcial de voto del H. Magistrado Ponente Doctor OMAR EDGAR BORJA SOTO manifestó:

“En mi criterio no puede separarse la indemnización de perjuicios morales obtenidos de la privación la libertad con la reconocida en la acción de grupo por concepto de hacinamiento, porque ambas provienen de situaciones inescindiblemente vinculadas, caras de la misma moneda en cuanto que buscan resarcir y compensar el sufrimiento y las incomodidades del detenido, aflicciones y restricciones que acontecen en un sitio determinado como lo es el establecimiento carcelario, su infraestructura y condiciones físicas se enmarcan dentro de las molestias y fastidios que le afectan, por tanto, no se observa un elemento relevante que lo diferencia e individualice para que sean compatibles, aun si en gracia de discusión se tratara de identificar fuentes distintas del daño, por un lado, la derivada de la privación injusta de la libertad, del otro, la que emerge de estar recluso en un establecimiento carcelario en hacinamiento.”

3. EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL, DEL MARCO FUNCIONAL Y COMPETENCIAL QUE NUTRE SU CONTENIDO OBLIGACIONAL.

Pese a lo expuesto en precedencia, lo cual en estricto sentido impide desplegar un estudio de imputación fáctica y jurídica dentro del presente asunto, ante la ausencia de acreditación del daño antijurídico que sirve de fundamento a las pretensiones de la demanda, en el evento de que su H. Señoría considere desplegar aquel estudio, los daños alegados por la parte actora, de forma alguna podrían serle imputados fáctica o jurídicamente al Municipio de PALMIRA, al tenor de los siguientes argumentos:

El Secretario de Gobierno del Municipio de PALMIRA, actuando como Supervisor del Convenio Interadministrativo de Integración de Servicios Numero NP-1069-2023, el cual fue suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y el marco del mismo, se permite solicitar su intervención en una visita de seguimiento en el Comando Sur de la Ciudad de Palmira, que tendrá como finalidad realizar una revisión del estado en el que se encuentran los alimentos enviados por la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para el personal privado de la libertad que se encuentran reclusos en las locaciones que hacen las veces de centros de detención transitoria. La anterior diligencia, se llevará a cabo con el objetivo de dar una correcta ejecución al convenio con el INPEC, toda vez que, la administración municipal, tiene el compromiso de velar por el buen desarrollo del Convenio y que este se ejecute conforme con el proyecto, estudios previos y fichas técnicas. Además, debe colaborar con todas las acciones inherentes y necesarias que permitan garantizar los derechos de la población privada de la libertad, Por lo anterior, se solicita de su intervención en el Comando Sur, ubicado en Carrera 24 # 21-50, barrio Las Ferias.

El Suscrito SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, CORONEL (RA) RODRIGO CEPEDA ASCENCIO, identificado con C.C. No. 74.326.417 expedida en Belén y el SECRETARIO DE GOBIERNO, DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN DORRONSORO, identificado con C.C. No. 16.255.801 expedida en Palmira, ambos en ejercicio de la delegación otorgada mediante Decreto Municipal 321 de noviembre 29 de 2022, por el Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública; Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra el Doctor GUILLERMO ANDRES GONZALEZ ANDRADE mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.795.177 expedida en Tuluá - Valle, nombrado mediante Resolución No. 000710 del 06 de febrero de 2023 y acta de posesión de la misma fecha, quien obra en su calidad de DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE INPEC, debidamente facultado por la Resolución No. 003250 del 14 de mayo de 2021 para actuar en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, quien para efectos de la presente se denominara el INPEC con domicilio en Santiago de Cali, Avenida 2da Norte No. 23 AN 11 hemos convenido la celebración del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DESERVICIOS, regido por las siguientes clausulas, previa las siguientes CONSIDERACIONES. 1). Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que: "(...) los diferentes Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la consecución de sus fines". 2). Que el artículo 209 ibídem, contempla: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 3). Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1988 reza: "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares (...). 4). Que el artículo 95 ibídem, insta: "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121



SC-CER415753





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (...)" 5). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados (...)" 6). Que el artículo 40 ibídem, prevé: "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles y comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la Ley, al orden público y a los principios y finalidades de esta ley y los de la buena administración (...)" 7). Que la Ley 65 en su artículo 17 observa: "Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva (...) En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios (...) La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario". 8). Que el artículo 19 ibídem, estipula: "Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el Reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios. (...)". 9). Que de conformidad con el Decreto 2160 de 1992. Es creado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, establecimiento público adscrito al Ministerio de justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa. 10). Que de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los alcaldes podrán celebrar contratos y convenios para materializar los planes de desarrollo territorial y presupuestos anuales en tanto es el representante legal del municipio. Que el Municipio de Palmira, por medio del Acuerdo No. 108 del 04 de diciembre de 1996, adopto el estatuto orgánico de presupuesto municipal, en donde se estableció en su artículo 114 que el Alcalde podrá celebrar contratos estatales a nombre del ente territorial. Que no obstante, el artículo 211 de la constitución, en aras de optimizar el ejercicio adecuado de la gestión administrativa, permite la delegación de funciones que autorice la ley, en la medida que se fijen condiciones claras para el ejercicio de esa delegación. Que el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, modificadorio del artículo 92 de la Ley 136 de 1984 señala que el alcalde podrá delegar en los secretarios de la Alcaldía las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. Que así mismo el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 consagra la facultad del representante legal de la entidad estatal para delegar total o parcialmente la competencia de celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en quienes desempeñen cargos del nivel directivo sus equivalentes. Que los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998 prevén que las autoridades administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores, siempre y cuando conste por escrito, se determine la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se trasfiere. Que mediante el Decreto 321 del 29 de 7 noviembre de 2023 por el cual se



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

realiza una delegación de funciones en materia contractual a las dependencias del sector central de la Alcaldía de Palmira y se dictan otras disposiciones en su Artículo Décimo cuarto. Contratos y Convenios interadministrativos. Deléguese a los secretarios de despacho, directores, jefes de oficina, la suscripción de los contratos y convenios interadministrativos que prevé el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 95 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 (...) 11). Que el numeral 22 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011, a través del cual se modifica la estructura del INPEC, estableció como funciones del INPEC: “Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con las autoridades competentes”. 12). Que en acatamiento de la Ley y la Constitución Nacional, el INPEC y los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y Distrito Capital de Santafé de Bogotá, han venido celebrando convenios interadministrativos de integración de servicios, aunando esfuerzos mancomunados en cumplimientos de sus objetivos misionales. 13). Que en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC se crean las Direcciones Regionales con el Decreto 1242 de 1993, y estructura modificada finalmente a través del Decreto 4151 de 2011, donde en el numeral 6 del artículo 29 les faculta para “Promover el desarrollo de alianzas y convenios con las demás entidades públicas y privadas de la Región”. 14). Que mediante Resolución 003250 del 14 de mayo de 2021, el Director General del INPEC, delegó y desconcentró en los Directores Regionales la ordenación del gasto y celebración de contratos o convenios interadministrativos dentro de los parámetros establecidos en el literal 2 del artículo sexto. 15). Que el presente Convenio Interadministrativo de Integración de Servicios, se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, y demás disposiciones que aclaren, modifiquen o reglamenten. 16). Que en Sentencia SU-122-22 de marzo 31 de 2021 la Corte Constitucional ordena “a las entidades territoriales que en la celebración de los convenios con el INPEC a los que hace referencia el artículo 19 de la Ley 65 de 1993, tener en cuenta que la suscripción de esos convenios no puede llevar a crear hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios”. Que, en virtud a lo anterior, las partes acuerdan las cláusulas que a continuación se enuncian, CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, DANDO CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LA LEY 65 DE 1993, ASEGURANDO INTEGRALMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE A LIBERTAD. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL CONVENIO: El presente convenio se suscribirá para dar cumplimiento a lo contenido en Si Art. 19 de la Ley 65 de 1993 el cual en su tenor literal reza lo siguiente: ARTÍCULO 19 RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: a) Fijación de sobre sueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión; b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada

4. EL MARCO FUNCIONAL Y COMPETENCIAL ASIGNADO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE A LA USPEC QUE NUTREN EL CONTENIDO OBLIGACIONAL DE LA ENTIDAD.

Al respecto, lo primero que vale la pena advertir, es que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, surgió como resultado de la escisión de las funciones administrativas y de ejecución, que se encontraban asignadas al INPEC para el cumplimiento de sus objetivos.

Es así, como el Gobierno Nacional, a través del Decreto 4150 de 2011 creo esta Unidad, con el fin de que el estado Colombiano cuente con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad, y de esta manera, brindar apoyo administrativo y de ejecución de actividades que soporten al Instituto Nacional Penitenciario para el cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente, estableciendo, en el artículo 4 ejusdem, como objeto de la USPEC:

“Gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC”.

Así mismo, dicha norma define en su artículo 5, las precisas funciones asignadas a la entidad, de las cuales me permito destacar las siguientes:

“(…)3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria (...)

5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria”

E igualmente establece en su artículo 29:

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) continuará ejerciendo las funciones escindidas hasta que entre en operación la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC), lo cual deberá ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto. El Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) deberá adelantar de manera inmediata las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente decreto que entrará a regir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto”

Quiere decir lo anterior que las funciones asignadas por el Gobierno Nacional a esta entidad, son de carácter eminentemente administrativo, logístico y contractual, con el fin de brindar apoyo al INPEC en la gestión penitenciaria y carcelaria, es decir la función carcelaria y penitenciaria radica en manos del INPEC siendo mí representada únicamente un apoyo administrativo a la gestión desarrollada por dicho instituto.

Aunado a lo anterior, la USPEC es una entidad de creación reciente, y cuya finalidad es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población privada de la libertad, a través del suministro de bienes y servicios, mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria y encargada de suscribir un contrato de fiducia mercantil, con el fin de que el fideicomitente contrate los servicios de salud de la Población Privada de la Libertad, funciones que como se demostrará a continuación, han venido siendo satisfechas en su integridad a través de las gestiones logísticas administrativas y contractuales desplegadas por la entidad, sin que sea dable, de forma alguna, que los presuntos daños alegados, y cuya génesis se remonta a décadas atrás en donde la USPEC ni siquiera existía, puedan ser imputados a mí representada.

Afirmación que encuentra fundamento, entre otras, en las sentencias T- 606, T-607 y T- 153 de 1998 proferidas por la Corte Constitucional Colombiana, a través de la cual se declaró el ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LAS PRISIONES COLOMBIANAS, en donde, entre otros aspectos, dicho tribunal ordena:

“Al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales (...) Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción y refacción carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones”

Así mismo, ordena:



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

“La realización total del plan de construcción y refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones”

Quiere decir lo anterior, que las difíciles circunstancias planteadas por la p. demandante, y de la cual se derivan los presuntos daños enrostrados, no son para nada novedosas, sino que son el resultado y consecuencia de una problemática de orden “estructural” de muchos años atrás, en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País, que prevalecía cuando esta entidad ni siquiera existía, y que solo a partir de su creación, han venido disminuyendo gracias a la gestión administrativa, logística y contractual desplegada por la entidad, sin que sea humanamente posible que en tal corto tiempo de creación, la USPEC pueda superar al 100 % la problemática del hacinamiento carcelario que aqueja al país desde décadas atrás.

EN LO QUE RESPECTA A LA SALUD DE LA PPL.

En lo que respecta al servicio de SALUD para la PPL, lo primero que vale la pena destacar, es que el legislador colombiano, a través de la Ley 1709 de 2014 reformó algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985, estableciendo en su artículo 66:

“Modifícase el artículo 105 de la ley 65 de 1993, el cual quedará así: Servicio médico penitenciario y carcelario El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud”

Así mismo, creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, al siguiente tenor:

“Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.

Parágrafo 2º. El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo”

Posteriormente a través del Decreto 1069 de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto único Reglamentario del Sector Justicia, el que fue adicionado a través de decreto 2245 de 2015, que dispuso:

“Adiciónese el Capítulo XI al Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, con sus correspondientes secciones, del siguiente tenor: **“CAPÍTULO XI Prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”**

Estableciendo las funciones de la USPEC, en relación con la prestación del servicio de salud de la PPL en el siguiente sentido,

ARTÍCULO 2.2.1.11.3.1. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Previa deliberación y decisión del Consejo Directivo Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en calidad de Secretaria Técnica de dicho consejo, remitirá a la entidad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo la solicitud de necesidades de contratación. La entidad fiduciaria contratara y pagara los servicios autorizados.

ARTÍCULO 2.2.1.11.3.2. FUNCIONES DE LA USPEC. En desarrollo de funciones previstas en el Decreto Ley 4150 de 2011 y demás que fijen sus competencias, corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, en relación con la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad: (...)

4. Contratar la entidad fiduciaria con cargo a recursos del Fondo Nacional Salud de la Personas Privadas de la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la prestación integral y oportuna los servicios de salud a la población privada de la libertad, de acuerdo con decisiones del Consejo Directivo Fondo, así como con el Modelo de Atención en Servicios.

5. Contratar las actividades de supervisión e interventoría del contrato de fiducia mercantil que se suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud las Personas Privadas de la Libertad de acuerdo a lo previsto en numeral 6 del artículo 2.2 1.11.2.3., del presente capítulo. (...)

Posteriormente a través del Decreto 5159 de 30 de noviembre de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y en su artículo 3 dispone:

"Implementación del Modelo de Atención en Salud. Corresponderá a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC, implementar el Modelo de Atención en Salud que se adopta en la presente resolución. Para la implementación del Modelo se expedirán los Manuales Técnico administrativos que se requieran por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC y se adelantará los trámites correspondientes ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad"

Seguidamente, a través del Decreto 1142 de 2016 se modifican algunas disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, estableciendo en relación con las funciones de la USPEC:

Artículo 7.- Modifíquese el artículo 2.2.1.11.3.2 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así :

"Artículo 2.2.1.11 Funciones de la USPEC. (...)

2. Contratar la entidad fiduciaria con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la libertad, de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo del Fondo, así como con el Modelo en

Servicios Salud establecido y teniendo en consideración los respectivos manuales técnicos administrativos para la prestación de servicios de que se adopten.

3. Contratar actividades supervisión e interventoría sobre el contrato fiducia mercantil que se suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas la Libertad de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.11.2.3 del presente capítulo. (...)

Siendo preciso indicar en este punto que, aquellas funciones relacionadas con la suscripción de los contratos de fiducia mercantil para la prestación del servicio de salud de la PPL, solo recayeron en manos de la USPEC, hasta el 1 de enero de 2016, como quiera que con antelación a dicha fecha, aquella competencia se encontraba reglamentariamente instituida en cabeza de CAPRECOM EICE Hoy Liquidada, al tenor de los Decretos 2496 de 2012 y 2519 de 2015.

5. EXCEPCIONES.

De conformidad con los argumentos expresados a lo largo de la presente contestación de demanda, solicito muy comedidamente al Honorable Señor Juez, declarar probadas las excepciones que a continuación me permito enlistar, así como cualquiera otra excepción que su Honorable Señor Juez, encuentre probada con ocasión de la presente contestación de demanda:

5.1 FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA:

En relación con la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, el H. Consejo de Estado en sentencia del 3 de mayo de 2013 proferida dentro del expediente 26112 estableció que aquella: Se configura cuando la entidad demandada no participó en los hechos invocados como dañosos y, en consecuencia, no está llamada a responder por los perjuicios que éstos hubieran podido causar”

Como bien hemos indilgado, el MUNICIPIO PALMIRA, ha carecido de responsabilidad alguna en la situación física y de salud del afectado directo, razón por la cual, se ha de adjudicar sobre otro sujeto la responsabilidad de llegar a probarse. Así las cosas, estamos frente a la ausencia o falta de legitimación en la causa por pasiva en favor del Municipio de PALMIRA, fundamentada básicamente con lo contenido por disposiciones jurisprudenciales, de la siguiente manera:

"si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte, al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos a que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absueltos situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”

Ello se funda en que básicamente lo que se reclama no fue realizado por el Municipio de PALMIRA, en éste caso, por toda vez que el demandante pretende reclamar prestaciones inexistentes, ello fundado en supuestas actuaciones de la administración, que de ninguna forma realizaron actuaciones tendientes a afectar el estado del demandante,

Atendiendo a que en el presente asunto, se alega como daño antijurídico el daño moral presuntamente irrogado a la parte demandante, derivado de las condiciones de hacinamiento que se presenta en como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas hasta el 25 de julio de 2.022, mientras se encontraba detenido en el Caí Comando Sur, del municipio de Palmira - Valle del Cauca., en donde el demandante se encuentra recluso, y de conformidad con lo expresado a lo largo de la presente contestación de la demanda, en especial lo manifestado en la el acápite denominado “IMPOSIBILIDAD DE IMPUTAR FÁCTICA Y JURÍDICAMENTE LOS DAÑOS ALEGADOS A LA USPEC BAJO CUALQUIERA DE LOS DOS REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL” de las razones de defensa atrás señaladas y que hago parte íntegra de la presente excepción; es evidente que el Municipio PALMIRA ha adelantado y satisfecho cada una de las gestiones administrativas, logísticas y contractuales para el suministro de bienes y servicios, tales como alimentación, mejoramiento de la infraestructura y la suscripción de los contratos Interadministrativos para la prestación del servicio de la población Privada de la Libertad.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

El Secretario de Gobierno del Municipio de PALMIRA, actuando como Supervisor del Convenio Interadministrativo de Integración de Servicios Numero NP-1069-2023, el cual fue suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y el marco del mismo, se permite solicitar su intervención en una visita de seguimiento en el Comando Sur de la Ciudad de Palmira, que tendrá como finalidad realizar una revisión del estado en el que se encuentran los alimentos enviados por la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para el personal privado de la libertad que se encuentran reclusos en las locaciones que hacen las veces de centros de detención transitoria. La anterior diligencia, se llevará a cabo con el objetivo de dar una correcta ejecución al convenio con el INPEC, toda vez que, la administración municipal, tiene el compromiso de velar por el buen desarrollo del Convenio y que este se ejecute conforme con el proyecto, estudios previos y fichas técnicas. Además, debe colaborar con todas las acciones inherentes y necesarias que permitan garantizar los derechos de la población privada de la libertad, Por lo anterior, se solicita de su intervención en el Comando Sur, ubicado en Carrera 24 # 21-50, barrio Las Ferias.

El Suscrito SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, CORONEL (RA) RODRIGO CEPEDA ASCENCIO, identificado con C.C. No. 74.326.417 expedida en Belén y el SECRETARIO DE GOBIERNO, DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN DORRONSORO, identificado con C.C. No. 16.255.801 expedida en Palmira, ambos en ejercicio de la delegación otorgada mediante Decreto Municipal 321 de noviembre 29 de 2022, por el Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública; Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra el Doctor GUILLERMO ANDRES GONZALEZ ANDRADE mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.795.177 expedida en Tuluá - Valle, nombrado mediante Resolución No. 000710 del 06 de febrero de 2023 y acta de posesión de la misma fecha, quien obra en su calidad de DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE INPEC, debidamente facultado por la Resolución No. 003250 del 14 de mayo de 2021 para actuar en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, quien para efectos de la presente se denominara el INPEC con domicilio en Santiago de Cali, Avenida 2da Norte No. 23 AN 11 hemos convenido la celebración del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DESERVICIOS, regido por las siguientes clausulas, previa las siguientes CONSIDERACIONES. 1). Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que: "(...) los diferentes Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la consecución de sus fines". 2). Que el artículo 209 ibídem, contempla: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 3). Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1988 reza: "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares (...". 4). Que el artículo 95 ibídem, instaura: "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (...". 5). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados (...". 6). Que el artículo 40 ibídem, prevé: "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles y comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la Ley, al orden público y a los principios y finalidades de esta ley y los de la buena administración (...). 7). Que la Ley 65 en su artículo 17 observa: “Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva (...) En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios (...) La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario”. 8). Que el artículo 19 ibídem, estipula: “Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el Reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios. (...)”. 9). Que de conformidad con el Decreto 2160 de 1992. Es creado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, establecimiento público adscrito al Ministerio de justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa. 10). Que de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los alcaldes podrán celebrar contratos y convenios para materializar los planes de desarrollo territorial y presupuestos anuales en tanto es el representante legal del municipio. Que el Municipio de Palmira, por medio del Acuerdo No. 108 del 04 de diciembre de 1996, adopto el estatuto orgánico de presupuesto municipal, en donde se estableció en su artículo 114 que el Alcalde podrá celebrar contratos estatales a nombre del ente territorial. Que no obstante, el artículo 211 de la constitución, en aras de optimizar el ejercicio adecuado de la gestión administrativa, permite la delegación de funciones que autorice la ley, en la medida que se fijen condiciones claras para el ejercicio de esa delegación. Que el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, modificadorio del artículo 92 de la Ley 136 de 1984 señala que el alcalde podrá delegar en los secretarios de la Alcaldía las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. Que así mismo el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 consagra la facultad del representante legal de la entidad estatal para delegar total o parcialmente la competencia de celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en quienes desempeñen cargos del nivel directivo sus equivalentes. Que los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998 prevén que las autoridades administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores, siempre y cuando conste por escrito, se determine la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se trasfiere. Que mediante el Decreto 321 del 29 de 7 noviembre de 2023 por el cual se realiza una delegación de funciones en materia contractual a las dependencias del sector central de la Alcaldía de Palmira y se dictan otras disposiciones en su Artículo Décimo cuarto. Contratos y Convenios interadministrativos. Deléguese a los secretarios de despacho, directores, jefes de oficina, la suscripción de los contratos y convenios interadministrativos que prevé el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 95 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 (...) 11). Que el numeral 22 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011, a través del cual se modifica la estructura del INPEC, estableció como funciones del INPEC: “Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional,



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

en coordinación con las autoridades competentes". 12). Que en acatamiento de la Ley y la Constitución Nacional, el INPEC y los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y Distrito Capital de Santafé de Bogotá, han venido celebrando convenios interadministrativos de integración de servicios, aunando esfuerzos mancomunados en cumplimientos de sus objetivos misionales. 13). Que en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC se crean las Direcciones Regionales con el Decreto 1242 de 1993, y estructura modificada finalmente a través del Decreto 4151 de 2011, donde en el numeral 6 del artículo 29 les faculta para "Promover el desarrollo de alianzas y convenios con las demás entidades públicas y privadas de la Región". 14). Que mediante Resolución 003250 del 14 de mayo de 2021, el Director General del INPEC, delegó y desconcentró en los Directores Regionales la ordenación del gasto y celebración de contratos o convenios interadministrativos dentro de los parámetros establecidos en el literal 2 del artículo sexto. 15). Que el presente Convenio Interadministrativo de Integración de Servicios, se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, y demás disposiciones que aclaren, modifiquen o reglamenten. 16). Que en Sentencia SU-122-22 de marzo 31 de 2021 la Corte Constitucional ordena "a las entidades territoriales que en la celebración de los convenios con el INPEC a los que hace referencia el artículo 19 de la Ley 65 de 1993, tener en cuenta que la suscripción de esos convenios no puede llevar a crear hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios". Que, en virtud a lo anterior, las partes acuerdan las cláusulas que a continuación se enuncian, CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, DANDO CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LA LEY 65 DE 1993, ASEGURANDO INTEGRALMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE A LIBERTAD. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL CONVENIO: El presente convenio se suscribirá para dar cumplimiento a lo contenido en Si Art. 19 de la Ley 65 de 1993 el cual en su tenor literal reza lo siguiente: ARTÍCULO 19 RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: a) Fijación de sobre sueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión; b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada.

Así las cosas, es incontrovertible que la Gestión del Municipio de PALMIRA con el INPEC y la del USPEC, contrario a ser participativa del daño alegado, se ha erigido como una solución a una problemática estructural, razón por la cual, de conformidad con la regla jurisprudencial citada ab initio de la presente excepción, es evidente que no existe fundamento jurídico ni fáctico a partir del cual mi representada pudiere ser llamada a responder civilmente por la producción de los daños enrostrados a través del presente medio de control al no haber participado en la producción o existencia del daño que se alega. Por tal razón, es incontrovertible que a mi prohijada le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente asunto.

5.2 AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Como se recordará, la legislación, jurisprudencia y la doctrina han tenido como elementos esenciales de la responsabilidad a: un HECHO de la administración, un DAÑO ANTIJURIDICO y en esa relación UN NEXO CAUSAL, sumado a una IMPUTACIÓN JURIDICA. A grandes rasgos, puede decirse que el hecho no es otro que la circunstancia fáctica que se reclama de la administración, que de por sí solo no genera responsabilidad a nadie, si no genera un perjuicio, el DAÑO ANTIJURIDICO es la transformación del hecho en el perjuicio y a su vez tiene dos categorías legales: el material y el inmaterial, del primero se distingue el daño emergente y el lucro cesante y del segundo puede decirse que es conocido como el "EXTRAPATRIMONIAL", que en principio tenía resistencia en su aceptación, pero actualmente se conocen categorías como EL MORAL (sufrimiento o dolor), EL FISIOLÓGICO (integridad humana y hasta vida en relación), A las condiciones de vida (altas, graves y permanentes) y hasta el hoy nombrado "DAÑO A LA SALUD" con origen en la teoría Italiana y que se empieza

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121



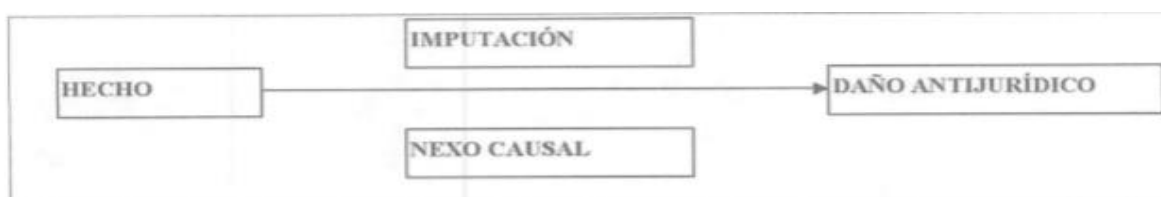
SC-CER415753





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

a manejar en muestras esferas jurídicas En cuanto a la imputación, esta categoría es importantísima pues tiene dos puntos de vista, por un lado la "de Hecho" que es atribuirle el hecho a una conducta de la administración y por otro lado la "jurídica" que es encasillar la conducta en un título de imputación (falta, daño y riesgo) a menos que pertenezca a un régimen especial, como el que nos ocupa, donde se discute la responsabilidad médica, por Ultimo, el elemento determinante entre toda esta relación se ha denominado "nexo causal", que es quien en verdad vincula el hecho al daño antijurídico a través de una causa, sin embargo hay dos formas de apreciarlo: está la equivalencia de condiciones, que relaciona todas las posibles causas incluida la existencia propia y que no ha sido aceptada por nuestra legislación, como también está la Causalidad adecuada, que viene siendo una teoría más adecuada, por la cual se reduce el número de causas a una: el hecho, pues sin este no se hubiera producido el daño. Dicha relación se explica así:



En cuanto al caso específico y su adecuación a los elementos de la responsabilidad se presentan así: Relación con el hecho: El hecho donde se pueda vislumbra la Responsabilidad MUNICIPIO DE PALMIRA, una circunstancia fáctica dañina, ya que ésta se originaba en otra, como lo es la causa de ocurrencia de su afectación inicial.

Relación con el daño antijurídico: al no existir un hecho reprochable del MUNICIPIO DE PALMIRA, no hay un daño antijurídico que la vincule, toda vez que en esas condiciones solo existiría un daño antijurídico, pero no de tipo administrativo, entre tanto no puede probarse y/o si quiera decirse, que sea provocado por la actuación del MUNICIPIO DE PALMIRA, ya que dicha antijuridicidad no es compatible con la prevista para las personas naturales a las cuales les origina responsabilidad de tipo penal y/o Civil, que es donde debería buscarse el asunto y el afectado debería buscar su correspondiente indemnización ante el responsable de tal tipo de daño.

Es por ello que al analizar el punto central del argumento del demandante, que relaciona con la actuación del MUNICIPIO DE PALMIRA, se puede concluir que éste no tiene fundamento, ya que el supuesto daño no lo ocasiona un trámite administrativo.

5.3 EXCEPCIÓN - INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL.

Uno de los elementos esenciales para que surja la responsabilidad administrativa es la existencia del nexo causal, es decir, el vínculo de debe existir entre hecho y daño antijurídico.

La explicación del vínculo causal en el sentido de determinar dentro de todas las posibles ¿Cuál fue la causa eficiente que produjo un daño antijurídico?, ha sido dilucidada reiteradamente por doctrina y jurisprudencia mediante la aplicación de la Teoría de la Causalidad Adecuada, la cual básicamente sostiene que hay que precisar aquellas que sean realmente determinantes en la producción del resultado dañoso, solo quienes hayan originado esas causas determinantes, comprometen su responsabilidad.

Sobre la teoría de la causalidad adecuada ha dicho el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Dra. María Helena Giraldo Gómez, en Sentencia del 17 de junio de 2004, radicación número 44001-23- 31-000-1996-0825-01 (15183), actor Elmer Francisco Vanegas Palmezano y Otros, Demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional:

“... Para que surja el deber de indemnizar con fundamento en el régimen de responsabilidad patrimonial previsto en el artículo 90 constitucional, ... , no es suficiente que el demandante haya sufrido un daño cierto, determinado o determinable y antijurídico y que contra quien se dirige la imputación haya incurrido en alguna conducta de irregularidad constitutiva de falla de aquellas alegadas por el actor, porque es necesario además que se demuestre que el daño se

produjo como consecuencia de la falla de la administración, nexo causal que para efectos de esta declaratoria no debe de ser visto desde el punto de vista de la causalidad física perteneciente al mundo de los fenómenos naturales, sino desde el punto de vista jurídico, entendido como el estudio de la eficiencia de la conducta estatal en la causación de un daño desde el deber ser que prevé la norma para el Estado en relación con el administrado...”

Con relación a las causales eximentes de responsabilidad el Consejo de Estado ha dicho que para la configuración resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa de daño, como la raíz determinante del mismo:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad, fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen un conjunto de eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, se insiste, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que proceda admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente (...) Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima no sólo sea causa del daño, sino que constituya la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, su reparación estará rebajada en proporción a la participación de la víctima.”

De lo anterior, podemos observar que no existe relación real entre el Municipio de PALMIRA, en tal sentido me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas por la parte actora, por carecer de fundamentos jurídico, factico y probatorio que permita señalar al Municipio de PALMIRA, como causante de los perjuicios causados a los ACTORES, como quiera que las mismas no son imputables a esta parte.

5.4 EXCEPCIÓN - INEXISTENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO IMPUTABLE AL MUNICIPIO DE PALMIRA.

Sobre la teoría de la causalidad adecuada ha dicho el Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Dra. María Helena Giraldo Gómez, en Sentencia del 17 de junio de 2004, radicación número 44001-23- 31-000-1996-0825-01 (15183), actor Elmer Francisco Vanegas Palmezano y Otros, Demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional:

(...) Para que surja el deber de indemnizar con fundamento en el régimen de responsabilidad patrimonial previsto en el artículo 90 constitucional, ... , no es suficiente que el demandante haya sufrido un daño cierto, determinado o determinable y antijurídico y que contra quien se dirige la imputación haya incurrido en alguna conducta de irregularidad constitutiva de falla de aquellas alegadas por el actor, porque es necesario además que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de la falla de la administración, nexo causal que para efectos de esta declaratoria no debe de ser visto desde el punto de vista de la causalidad física perteneciente al mundo de los fenómenos naturales, sino desde el punto de vista jurídico, entendido como el estudio de la eficiencia de la conducta estatal en la causación de un daño desde el deber ser que prevé la norma para el Estado en relación con el administrado (...).

Uno de los elementos esenciales para que surja la responsabilidad administrativa es la existencia del



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

nexo causal, es decir, el vínculo que debe existir entre el hecho y el daño antijurídico. La explicación del vínculo causal en el sentido de determinar dentro de todas las posibles, cuál fue la causa eficiente que produjo un daño antijurídico, ha sido dilucidada reiteradamente por la doctrina y jurisprudencia mediante la aplicación de la Teoría de la Causalidad Adecuada, la cual básicamente sostiene que hay que precisar aquellas causas que sean realmente las determinantes en la producción del resultado dañoso, solo quienes hayan originado esas causas determinantes, comprometen su responsabilidad.

En el entendido de lo antes traído a colación, podemos decir que cuando se produce un daño antijurídico y se demanda al estado, se deberá demostrar la falla de la administración en su actuar, pues no debe de ser vista desde los hechos más relevantes a los ojos de quien competen, deben de sino desde un punto de vista técnico, jurídico y lógico.

5.5 FALTA DE MEDIOS PROBATORIOS PARA ARGUMENTAR LA PRESUNTA FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL Municipio de PALMIRA.

La parte actora únicamente manifiesta que se presentó una falla en el servicio por parte de mi prohijada, pero no argumenta ni jurídica ni fácticamente las razones por las cuales se deba responder patrimonialmente aún más cuando no aporta pruebas que permitan dilucidar alguna responsabilidad ya que dentro del mismo no hubo elementos materiales probatorios de los cuales se dependen:

- ***Inexistencia de fallo debidamente ejecutoriado, que indique los responsables o móviles del asunto, por carecer de fundamentos jurídico, factico y probatorio que permita señalar al Municipio de PALMIRA, como causante de los perjuicios causados a los ACTORES, como quiera que las mismas no son imputables a esta parte.***
- ***Al proceso no se allegó prueba sumaria que comprometa la responsabilidad del Municipio de PALMIRA en acción u omisión conforme a su competencia.***
- ***No se ha determinado cual fue el nexo causal, que originó el hecho dañoso.***

Si bien la ley faculta al juez para decretar pruebas de oficio, esta posibilidad no exime de las obligaciones que les corresponden a las partes; cabe de recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que les indica a las partes de la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones a la defensa resulten probados.

Así las cosas, por deficiencia probatoria no es posible atribuir responsabilidad alguna a la administración pública, pues es indispensable por los medios legalmente dispuestos para ello demostrar, todos los hechos que sirvieron fundamento fáctico de la demanda y no solo una mera apreciación personal y de esta manera determinar cuál fue la actividad del ente demandado que guarda el necesario nexo causalidad con el daño y que permita imputarle la responsabilidad a mi prohijada., situación que no se dio en el sub-lite.

Ante la deficiencia probatoria anotada, su honorable despacho debe concluir que no se encuentra acreditada la responsabilidad de las entidades demandadas, presupuesto necesario para enjuiciar la conducta desarrollada por aquellas; por lo tanto, los actores no cumplieron con la carga probatoria mínima que le era exigible, relativa principalmente a acreditar la responsabilidad de las entidades demandadas. En ese entendido los demandantes no lograron demostrar la omisión, negligencia o inactividad, más aún cuando es evidente que nos encontramos frente al hecho de un tercero, el cual tiene las características de ser imprevisible e irresistible.

En cuanto al tema probatorio es importante tener en cuenta lo manifestado por la Jurisprudencia Contenciosa Administrativa en la mayoría de sus fallos y en materia de la carga de la prueba, que para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación; pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones.

La carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos. Sobre la carga de la prueba el H. Consejo de Estado señala que: “En procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado...”.

Como punto de partida se puede anotar, que la jurisprudencia colombiana, ha sido enfática en afirmar que el De acuerdo con las pruebas documentales allegadas y los hechos descritos en el memorial de la demanda, queda demostrado, que la Entidad Pública demandada no existe relación real entre el Municipio de PALMIRA, en tal sentido me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas por la parte actora, por carecer de fundamentos jurídico, factico y probatorio que permita señalar al Municipio de PALMIRA, como causante de los perjuicios causados a los ACTORES, como quiera que las mismas no son imputables a esta parte.

5.6 AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO COMO PRIMER ELEMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

Al tenor de lo expuesto en las razones de defensa que incorpora el presente escrito, en especial en el acápite denominado: “Ausencia de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual” y cuyos argumentos hago parte íntegra de la presente excepción.

Se tiene que la presente demanda no comporta vocación de prosperidad alguna, al no encontrarse plenamente acreditados los daños alegados por la parte actora, y en cuya virtud se pretende infundadamente comprometer la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

En relación con el daño, como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, ha sostenido el H. Consejo de Estado Colombiano:

“...[e]l daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso”

En tal virtud, y de conformidad con el libelo demandatorio, se tiene que la parte demandante, únicamente se ciñe a establecer o enrostrar una serie de circunstancias que aparentemente ocurren al interior del Cai– Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca., SIN ESTABLECER, CONCRETIZAR NI DETERMINAR DE FORMA ALGUNA ¿Cuáles fueron los hechos concretos, ciertos y personales que sufrió la parte demandante, y a raíz de los cuales sea dable acreditar el daño antijurídico alegado?

Pues contrario a la precitada regla establecida por el H. Consejo de Estado, la parte demandante pareciera querer obviar el requisito de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, y partir de la base de que, por el solo hecho de haber estado recluido, per se, se configuran los daños enrostrados.

Sin embargo, al no ser plausible la posición de la parte actora, y ser imperiosa la acreditación del daño antijurídico para desplegar un estudio de imputación fáctica y jurídica, y al no haber sido acreditado,



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

determinado, ni haber sido establecidas la titularidad o carácter personal del daño antijurídico cuya reparación se pretende, indefectiblemente nos encontramos ante un daño eventual, incierto e hipotético, que no comporta vocación de comprometer la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

5.7 IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO POR VULNERACIÓN A BIENES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS A FAVOR DE QUIENES NO SON VÍCTIMAS DIRECTAS DEL DAÑO.

De conformidad con el libelo demandatorio, se tiene que la parte demandante deprecia una indemnización a favor de cada uno de los integrantes del núcleo familiar más cercano del ACTOR, por concepto de PERJUICIOS MORALES, sin embargo, de conformidad con las tipologías de daño decantadas por el H. Consejo de Estado, aquella modalidad de perjuicio, solo se adecuaría a la VULNERACION DE BIENES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS, respecto del cual ha sostenido dicho H. Corporación, en primera medida, que solo en casos excepcionales es procedente la indemnización pecuniaria, había consideración que la finalidad de dicha tipología, no es de carácter indemnizatorio sino compensatorio. Y EN AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES, la indemnización solo es a favor de la víctima directa del daño. Tal como se expuso en el acápite denominado: “Ausencia de acreditación del daño derivado de la vulneración de los Derechos Constitucionales Fundamentales” de las razones de defensa contenidas en esta Contestación de Demanda, y que hago parte integral de la presente excepción.

5.8 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2 literal J de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala.

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

De acuerdo con la Sentencia del H. Consejo de Estado.

“(…) 2.- Caducidad del medio de control de reparación directa. Estructura conceptual.

(…) 2.4.- De manera concreta, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa dispone el artículo 164.2 literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. (…).

En nuestro caso concreto, según la Certificación entregada por el comandante de policía de la ciudad de Palmira manifestó lo siguiente “Siguiendo instrucciones del señor Capitán **ALEXANDER JOJOA MUÑOZ** Comandante Estación de Policía Palmira (E), informa que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluido en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022”.

En este orden de ideas, el ACTOR deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, como indica la certificación del comandante de policía de la ciudad de Palmira, estuvo recluido en el **CAI DELICIAS** el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022” fecha en la cual inicia a correr el termino de CADUCIDAD.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE DEFENSA JUDICIAL

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

ADJFO-002

Versión.05

26/09/2022

Página 22 de 24

Solicitud de información sobre los tiempos de reclusión en el CAI – Colombia del señor ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344

DEVAL EPALMIRA <deval.epalmira@policia.gov.co>
Para: Jose Edilberto Lozano Tello <jose.lozano@palmira.gov.co>

30 de enero de 2025, 9:36 a.m.

Mensaje de correo electrónico enviado por deval.epalmira@policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

Dios y Patria

Siguiendo instrucciones del señor Capitán Alexander Jojoa Muñoz Comandante Estación de Policía Palmira (E), respetuosamente me permito informar que el señor PPL ALEXANDER ARANA FLOR identificado con la cédula de ciudadanía 1.114.817.344, estuvo recluso en el CAI Delicias el día 24/01/2022 y fue dejado en libertad el día 12/07/2022.

CONTEO DE TERMINOS DEJADO EN LIBERTAD EL DÍA 12/07/2022.

Inicia el 13 julio de 2022 y Termina 13 julio de 2024.

El ACTOR, presenta solicitud de conciliación pre judicial a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Provincial) el día 25 junio de 2024, faltando 20 días para su vencimiento., donde dicho procedimiento fue repartido a la PROCURADURIA 217 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS., agotando el tramite requerido, donde el día **22 DE JULIO DE 2024** el PROCURADOR DE CONOCIMIENTO, declara fallida o fracasada la solicitud de conciliación.

A partir del día siguiente, es decir **23 DE JULIO DE 2024** el ACTOR, cuenta con VEINTE (20) días para radicar demanda de REPARACION DIRECTA, cuyo término seria el día 12 de AGOSTO DE 2024. Pero el ACTOR radico la demanda el dia 2024-11-29 Reparto y Radicación REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 29 de noviembre de 2024 con secuencia: 63119.

2024-11-29	Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 29 de noviembre de 2024 con secuencia: 63119	2024-11-29	2024-11-29	2024-11-29
------------	----------------------	--	------------	------------	------------

En tal sentido Señor Juez, en el evento de probarse la CADUCIDAD DE LA ACCION sea declarada.

5.9 GENÉRICA O INNOMINADA.

Las demás excepciones, que no hubiesen sido presentadas, pero de acuerdo con la ley, encuentre probadas dentro de la presente demanda (Art. 187 C.P.A.C.A). En virtud del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal en materia de excepciones, frente a los poderes oficiosos del Juez es necesario afirmar que lo fundamental no es la relación de los hechos que configuran una determinada excepción, sino la prueba de los mismos, por ende, si el juez encuentra probados los hechos que lo constituyen deberá reconocerla oficiosamente.

Por lo anterior, solicito al señor Juez, declarar oficiosamente, las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER415753



6. PRUEBAS

DOCUMENTALES:

1. Certificado de existencia y representación legal de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654- 6.

2. Copia de la póliza de seguros No. No. 420 -80- 994000000201, tomada por mí representada con la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654- 6.

6.1 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

- A. Acta de Visita No.1594 Revisión Alimentación carcelaria.
- B. Minuta Convenio INPEC.
- C. Acta de Visita No.1842 Diligencia de inspección Comando Sur
- D. Nota Interna No.2023-120.8.1.898 Citación a Visita de Revisión de Alimentos
- E. Nota Interna No.2023-120.8.1.951 Citación a Visita de Revisión de Alimentos
- F. Acta de Visita No.1875 Diligencia de Inspección
- G. CDP 1850 INPEC
- H. SCDP 2130- CONVENIO INPEC
- I. Otro si Convenio No.MP-1069-2023
- J. Acta de inicio CONVENIO PALMIRA
- K. Nomina Palmira 02 de mayo
- L. Acta de Visita No. 1849 CAI Zamorano
- M. Acta No.1850 Subestación Bolo
- N. TRD 2024-130.8.1.812
- Ñ. Solicitud Mpio PALMIRA- Respuesta Policía Nacional DEVAL

7. ANEXOS

- 1. Poder.
- 2. Los que se relacionan en el acápite de pruebas como documentales.

8. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

En escrito aparte formularé llamamiento en garantía para con la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** NIT. 860.524.654- 6.

9. NOTIFICACIONES.

Las personales las recibiré en la secretaría de su despacho, o en la Secretaría Jurídica, 7º piso de la Alcaldía Municipal de Palmira, ubicada en la calle 30 con carrera 29-39 Esquina edificio CAMP, igualmente a los siguientes correos electrónicos: notificaciones.judiciales@palmira.gov.co, Correo del Apoderado Municipio de Palmira (v). jose.lozano@palmira.gov.co
Telf. 315 591 7923.

DEMANDANTE y APODERADO JUDICIAL.

El Demandante: ALEXANDER ARANA FLOR, correo electrónico alexanderarana811@gmail.com

El suscrito apoderado: En la carrera 4ª No 11-40, Edificio Floro Saavedra, oficina 301, Ibagué- Tolima; correo electrónico: jorgeorjuela2@yahoo.es

diana-abogada2014@hotmail.com

Teléfono: 3118325736.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121



SC-CER415753





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE DEFENSA JUDICIAL

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

ADJFO-002

Versión.05

26/09/2022

Página 24 de 24

- **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, carrera 6 entre calles 9 y 10, edificio Palacio de San Francisco de Cali - Valle; correo electrónico: contactenos@valledelcauca.gov.co
njudiciales@valledelcauca.gov.co
- **LA RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, en la calle 72 No. 7-96 de Bogotá D.C., o en el correo electrónico deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
- **El INPEC**, en la calle 26 # 27- 86 de Bogotá o en los correos electrónicos notificaciones@inpec.gov.co
- **La USPEC**, en la AV. Calle 26 No 69-76 edificio elemento, Piso 12, 13, 14 Torre 4 agua Bogotá D.C; correo electrónico: buzonjudicial@uspec.gov.co
- **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, en la Calle 53 No 13-27 de Bogotá D.C; correo electrónico notificacionesjudiciales@minjusticia.gov.co
- **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL**, en la carrera 54 No. 26-25 CAN de Bogotá D.C, correo electrónico: segen.conciliacion@policia.gov.co; deval.notificacion@policia.gov.co
- **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, en la Avenida Calle 24 No 52- 01 Ciudad salitre Bogotá D.C., correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
- **LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, en la calle 16 No. 68D-89, de Bogotá D.C. el correo electrónico notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

Atentamente,

JOSÉ EDILBERTO LOZANO TELLO

C.C. No. 94 312 947

T.P. No. 121.177 del C.S. de la J.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121



SC-CER415753

